

GLOBAL EXCHANGE.

BOLETÍN DE PRENSA

4 de julio del 2000

México, D.F.

Aunque el fraude electoral no afectó los resultados de las elecciones presidenciales, diversos incidentes de compra, coacción e intimidación se dieron de forma extensa en regiones del Sur de México

Tales abusos constituyen una violación de la libertad de expresión política para los ciudadanos, concluye Global Exchange

Entre el 25 de junio y el 4 de julio una delegación de 60 observadores internacionales, entre los cuales se encuentran académicos, religiosos, estudiantes, trabajadores de salud y activistas de derechos humanos, han visitado México para investigar las condiciones de las elecciones federales del 2 de julio. Durante los diez días en que la delegación estuvo en el país, se visitaron algunos de los más conflictivos y empobrecidos estados de la república. Como resultado, los observadores han recogido un gran número de casos de manipulación electoral en comunidades rurales pobres.

La delegación ha sido organizada por Global Exchange, una organización internacional de derechos humanos con sede en San Francisco y con estatus consultivo ante la ONU, junto a Alianza Cívica, la organización de monitoreo electoral más importante en México. Los observadores visitaron los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, y la región de La Huasteca que corresponde al estado de Hidalgo.

A lo largo de la pasada década la sociedad mexicana ha realizado grandes avances, creando un espacio político más plural e incluyente para todos los ciudadanos de la nación. El trabajo del Instituto Federal Electoral (IFE), Alianza Cívica, grupos locales de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y grupos religiosos ha conseguido establecer un sistema electoral más transparente y justo. En particular, ha sido el compromiso hacia los principios democráticos adquirido por cada ciudadano mexicano lo que ha impulsado un sistema político verdaderamente competitivo.

Tal y como muestra la gran derrota del hasta ahora partido del gobierno en las pasadas elecciones del 2 de julio, la mayoría de los mexicanos no tienen dudas de que pueden ejercer su derecho a expresar toda ideología política sin miedo a la represión o persecución. A pesar de lo expuesto, hay aún un gran número de mexicanos para quienes la intimidación que ejercen sobre ellos oficiales gubernamentales y caciques es parte de su vida cotidiana. Incluso para aquellos

ciudadanos que disfrutaban de privilegios sociales y económicos, tales como funcionarios públicos, profesores, trabajadores de salud e ingenieros, el alejarse de lo establecido por el sistema del partido en el poder puede llevar al acoso y a las amenazas. Si bien ha quedado claro que el fraude electoral cometido por el PRI no puede ya determinar la realidad política nacional, incidentes como la compra de voto, coacción e intimidación continúan siendo preocupantes. Todavía hoy, en las regiones rurales y marginadas del sur de la república, un ambiente de intimidación permea el entramado social de muchas comunidades.

La vasta mayoría de ciudadanos mexicanos han conseguido crear una democracia libre de miedo a la intimidación, pero esta libertad aún tiene que abrazar a aquellos ciudadanos más vulnerables a este tipo de violaciones. El siguiente paso hacia esa democracia plural e inclusiva deberá ser la creación de un sistema político que alcance a esas capas más marginadas de la sociedad mexicana.

La delegación concluyó que aunque los casos de intimidación política observados no se dieron a una escala tan grande como para manipular los resultados de la carrera presidencial, definitivamente, al considerarse como un abuso del derecho a la libre expresión política, se deben tener en cuenta como graves violaciones de los derechos humanos.

Las observaciones que Global Exchange realizó durante el día de las elecciones revelan un país dividido por la educación, acceso a recursos y cultura política de sus ciudadanos. En la Ciudad de México, así como en la mayoría de las ciudades con alta densidad demográfica, el proceso electoral en sí, aunque a veces desorganizado e incluso, ocasionalmente, problemático debido a la confusión creada por algunos votantes carentes de la información debida, se realizó sin graves problemas y bajo un clima de cooperación entre todas las partes. Las regulaciones del IFE fueron sistemáticamente respetadas. En general, la delegación quedó gratamente impresionada por el profesionalismo de los representantes del IFE, quienes en todo momento intentaron corregir cualquier tipo de anomalía dada. Dentro del ámbito nacional, el sistema de escrutinio de votos creado por el IFE debe reconocerse como altamente transparente y rápido, ya que elimina de manera sustancial cualquier tipo de duda que pudiera existir sobre el fraude electoral en las urnas.

Aún así, en la mayoría de las comunidades que los observadores de Global Exchange estuvieron presenciando, el día del voto quedó desprestigiado por las constantes y a menudo descaradas violaciones al código electoral. Durante los días anteriores a la jornada del 2 de julio, los casos de compra, coacción e intimidación dejaron de ser sucesos aislados para convertirse de nuevo en parte de la rutina pre-electoral de estas comunidades.

De entre la vasta documentación recogida por la delegación de Global Exchange desde el 25 de junio hasta el 2 de julio, realizamos el siguiente resumen:

· Aunque en general podemos decir que los esfuerzos de la sociedad mexicana por eliminar los abusos electorales pueden considerarse de admirables y altamente positivos, aún estos esfuerzos no han conseguido llegar a las comunidades más marginales y pobres del país. La amplia presencia de representantes no acreditados del PRI para ejercer como representantes de partido en las casillas, interfirió gravemente en el proceso electoral e incluso creó un clima de intimidación en estas casillas. En algunos casos, el derecho básico de los ciudadanos al voto secreto no pudo estar garantizado. Por ejemplo, en diferentes comunidades las casillas estuvieron ubicadas dentro

o cerca de las oficinas municipales, abiertas aún siendo domingo, y donde se pudo observar una actividad más o menos constante de personas que entraban en el edificio, y quienes al salir se dirigían a votar. En otros casos, las casillas se encontraban junto a cuarteles militares. En una gran mayoría de las comunidades visitadas, tanto en el sur de la república como en la Ciudad de México, los observadores documentaron la entrega de despensas, comidas y material de labranza durante la jornada electoral.

· El mayor número de violaciones electorales ocurrieron en los días inmediatamente anteriores al 2 de julio. Las diversas entrevistas, la investigación y observación revelaron una constante por todo el sur mexicano de compra de voto y campaña ilegal, puesta en marcha por el PRI en un último intento por mantener el poder en el país. Funcionarios locales del partido en cuestión, aparentemente ignorantes de la ilegalidad de sus acciones y, por supuesto, alentados por el ambiente de impunidad vigente, abiertamente cometieron abusos y violaciones electorales.

· La delegación observó que en muchas comunidades del sur de México el trueque de apoyo material o económico por el voto a favor del PRI son una práctica común. Los observadores de Global Exchange desvelaron numerosos casos particulares de compra de voto, todos ellos cometidos por el PRI. También se documentó una extendida violación de las regulaciones electorales nacionales, las cuales prohíben el proselitismo electoral tras el cierre de campaña, acontecido en esta ocasión el miércoles 28 de junio.

· Oficiales municipales y demás representantes del hasta ahora partido oficial, PRI, continúan utilizando el aparato gubernamental y cargos directivos municipales para la coacción de voto en favor de los candidatos de dicho partido, o para la intimidación y amenaza de simpatizantes de la oposición, con la confianza y seguridad de que estas violaciones no serán investigadas o castigadas. La delegación recibió varios testimonios sobre este clima de hostigamiento e intimidación contra simpatizantes de partidos de oposición que prevalece, particularmente, en comunidades marginales y pobres. La mayoría de estos testimonios tienen como común denominador la amenaza de la pérdida de los programas económicos, beneficios sociales, o empleos gubernamentales.

En conclusión, la sociedad mexicana ha experimentado un cambio profundo en su progreso hacia la democratización del país. Los grandes logros conseguidos por el IFE en la innovación de las estructuras electorales, tanto administrativas como físicas, han dado lugar a un alto grado de participación y confianza por parte de los ciudadanos mexicanos en el proceso electoral. Sin embargo, consideramos que se debe de continuar dedicando más recursos federales para la expansión de la autoridad del IFE. Por otro lado, se debe examinar la eficacia de FEPADE y de las instituciones jurídicas encargadas de evaluar delitos electorales. La transición democrática en México sólo se completará cuando cada ciudadano tenga la confianza plena de que las denuncias por delitos electorales serán procesadas adecuadamente y sin temor a represalias. Global Exchange llama al nuevo gobierno mexicano a poner fin al crónico estado de impunidad que continúa violando los derechos humanos y civiles de aquellos ciudadanos más afectados por la falta de igualdad económica. Finalmente consideramos importante que se lleve a cabo la desmilitarización en las zonas rurales indígenas del sureste de la república como primer paso en la carrera hacia el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos mexicanos.